

UNA MIRADA EN RELACIÓN AL CIERRE DE ESCUELAS Y SECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Prof. Néstor Carasa

Suteba/FFyL-UBA. Consejero General de Cultura y Educación. Representante Docente SUTEBA. Cursante de la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas.



En la mañana del 2 de agosto nos sacudió la noticia de la muerte de dos trabajadores de la educación (una vicedirectora y un auxiliar) por el estallido de una garrafa en una escuela de la localidad de Moreno de la Provincia de Buenos Aires. Al dolor inicial fue sumándose indignación pues no era un hecho accidental sino por el contrario es el corolario derivado de las políticas de desfinanciamiento y ajuste/destrucción de la Educación pública llevadas a cabo por el gobierno provincial. Néstor Carasa dirigente gremial docente, hace referencia a algunas de estas políticas en su artículo sobre los cierres de escuelas y secciones que acompaña esta publicación.

EL intento de cerrar escuelas y grupos escolares, que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires procuró llevar adelante con algunos eufemismos tales como: fusiones, reorganización, reestructuración, optimización de recursos, etc.¹, no fue un hecho aislado por el contrario está en línea con las políticas de ajuste que desarrolla el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial.

Estas políticas reeditan en la escena pública viejos paradigmas, los cuales

1 Esta situación tuvo una gran repercusión en la prensa; véase algunos artículos periodísticos al respecto: <https://www.pagina12.com.ar/97299-cuando-los-alumnos-son-numeros-en-un-excel> ; <https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/la-gobernadora-vidal-cerro-47-escuelas-rurales-subajo-numero-alumnos-n1561621.html>

cíclicamente se presentan a lo largo de la historia, en particular en nuestro país. Modelos que expresan ideas más conservadoras que liberales. En nombre de la eficiencia y la eficacia dan forma a una gestión conducida por funcionarios sin formación específica, que se asumen como gerentes de personal, que piensan que la educación es un gasto que incrementa el déficit y que, por lo tanto, debe ser reducido.

En este escenario está claro que para la coalición de gobierno Cambiemos la educación no es un derecho, ni social ni personal, por lo tanto procura desentenderse de la universalidad del mismo y de la responsabilidad del Estado como garantía para su ejercicio. Intenta desplazar el principio de igualdad hacia una concepción meritocrática, donde la educación resulta un problema del individuo.

Al momento se ha logrado frenar el cierre de escuelas y secciones; consecuencia de una acción colectiva que involucró a todxs lxs actores vinculadxs y comprometidxs en la defensa de la educación pública: lxs estudiantes y sus familias, lxs docentes, las organizaciones de trabajadores, organismos de defensa de los derechos humanos y sectores de la comunidad, que entienden que el problema es común y que es urgente enfrentar las políticas de ajuste.

Lxs funcionarixs de la Dirección General de Cultura y Educación pusieron en evidencia su desconocimiento acerca de las situaciones de las escuelas que pretendían cerrar y de los conflictos que se generan en cada comunidad. De

más está decir que una planilla de cálculos no da cuenta de la función social de la escuela. Lxs burócratas desconocen la función social de la escuela. Ignoran que en muchos lugares es el único espacio público donde el Estado se hace presente; no entienden que en muchas comunidades y, fundamentalmente, en islas y el área rural es el lugar de encuentro, de promoción cultural y prevención de la salud.

Situación similar pudo observarse respecto a otras ofertas donde tampoco pudieron avanzar con el cierre de grupos y escuelas secundarias de Jóvenes y Adultos (Bachilleratos Populares) ni con las experiencias de finalización de estudios secundarios (Plan Fines, por ejemplo) por la importante acción de toda la comunidad educativa.

Parece claro que las estrategias del gobierno giran alrededor de : abrir numerosos focos de conflicto para retroceder luego ante algunos y avanzar en otros; no hay nada nuevo con los “cambios” de este gobierno pero resulta un error subestimarlos.

Como producto de esta lucha -en UNIDAD- de docentes, estudiantes, familias y con el apoyo de organizaciones sociales y de la comunidad en su conjunto, se ha logrado hasta el momento que el gobierno retroceda en la decisión que había tomado. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el problema está resuelto, o que lo sucedido sólo fue producto de algún apresuramiento; tampoco, sirve creer que el gobierno ha retrocedido porque la razón está de nuestro lado o porque hubo una reflexión acerca de sus errores.

Es necesario, y sería oportuno, que -como trabajadores e integrantes de los sectores populares- hagamos un análisis crítico acerca de qué hicimos (o qué no hicimos?) para que este modelo político llegará al gobierno y se sienta habilitado para tomar las medidas de ajuste.

Este conflicto es uno más en una secuencia que viene desarrollándose desde que la gestión-Pro asumió la conducción del estado. Estamos ante una gobierno que pregona el diálogo pero niega los espacios de participación y negociación colectiva; que se dice estar sujeta a derecho pero incumple con la legislación; que manifiesta tener preocupación por los “sectores vulnerables” pero desfinancia, cierra o reduce planes y programas sociales que sostienen el derecho a la educación.

La lucha continúa... defendiendo los derechos de cada estudiante, de lxs trabajadores, de una escuela popular y democrática, y de una educación pública de calidad, que da lugar a las diferencias y sostiene la igualdad.